

bandera socialista



Año XLIII
N° 138
Febrero 2023

f pstperú Lit-ci
http://pst.pe
bs.pstperuano@gmail.com

150
SOL

Periódico del Partido Socialista de los Trabajadores



El grito del pueblo pobre...

¡FUERA DINA Y EL CONGRESO!

¡Elecciones generales Ahora! ¡Asamblea Constituyente!

GOBIERNO Y CONGRESO
PROLONGAN LA CRISIS
CON MÁS MUERTES

pág. 2

EL ESTALLIDO DE LA
DEMOCRACIA DE LOS
EXPLOTADORES

pág. 4

¿PONER
"LA OTRA MEJILLA"
O DEFENDERNOS?

pág. 5

LA CLASE OBRERA Y
SU DIRECCIÓN EN EL
MOMENTO ACTUAL

págs. 6-7

LA LUCHA
POR LA
CONSTITUYENTE

pág. 8



EL ENVÍO DE TANQUES Y ARMAS PARA UCRANIA ES INSUFICIENTE

págs. 10-12



Gobierno y Congreso prolongan la crisis sumando más muertes

Desde el 7 de diciembre viene escalando en el país un estallido social contra el actual orden político, y el gobierno no ha hecho más que agravarlo y extenderlo. Las transnacionales y la derecha patronal al mando del gobierno y el Congreso fingen desconocer cuáles son las causas más profundas del descontento social que tienen que ver con la desigualdad social y económica ahondadas en tres décadas del modelo neoliberal, y agravadas por la pandemia, la crisis de fertilizantes y la ola inflacionaria mundial, porque se oponen a cualquier cambio en ese modelo; eso explica por qué respondieron con la criminalización de los conflictos y la represión.

Desde un comienzo el gobierno de Dina Boluarte, allanándose a los dictados del ala más derechista del Congreso, eligió una estrategia canalla de mostrar el conflicto como si se tratara de una ofensiva de grupos subversivos, y siguiendo el hilo de su propia mentira descargó una represión criminal, con prácticas de terrorismo de estado y ejecuciones extrajudiciales que ya lleva 60 manifestantes asesinados.

Si algo explica la rebelión popular que se originó en las provincias más alejadas y las poblaciones más marginadas, es que desde su punto de vista los sectores más reaccionarios se salieron con la suya al sacar del gobierno a Pedro Castillo en el que tenían depositadas sus ilusiones de salir de la marginación, por eso salieron a pedir su libertad y hasta su reposición en el cargo. Después con los primeros asesinatos la bandera de lucha unitaria pasó a ser la renuncia de Dina Boluarte.

Lo que explica las acciones del gobierno, por otro lado, está muy vinculado a lo anterior. Los “vacadores” alistaban un tercer intento de vacancia que, a diferencia de los dos anteriores, tenía a su favor un oscuro alineamiento del Ministerio



Fotocomposición: Internet

Público y el sistema judicial, y hasta —quedó después en evidencia— un acuerdo con Dina Boluarte para conseguir una sucesión constitucional en su calidad de vicepresidenta de la fórmula de Castillo, lo que les permitía a todos permanecer en los cargos hasta el 2026; de otra forma un gobierno de transición nominado por el Congreso debía convocar a elecciones inmediatas.

Nunca se sabrá a ciencia cierta si ese tercer intento de vacancia iba a contar con los 87 votos indispensables. Lo cierto es que el acto de Castillo de declarar la disolución del Congreso sin las causales previstas en la Constitución

fue considerado delito en flagrancia y como tal causal de vacancia, lo que fue rápidamente aprovechado por el Congreso acelerando la destitución del presidente.

La revelación de una traición de Dina Boluarte y de un gobierno apoyado en un Congreso rechazado por más del 80% de la población, gatilló una radical protesta popular desde el primer día principalmente en provincias de sur del país. Y los aliados del gobierno, para evitar un Merino II, promovieron la política represiva junto con la misma campaña de “terruqueo” que hicieron durante las elecciones 2021 para crear terror en la población

y hacer más digerible el voto por la candidata Keyko Fujimori.

La lucha contra la impunidad de las muertes

A pesar del salvajismo de la represión, el pueblo movilizado no retrocedió, al contrario, nuevos sectores se plegaron a la lucha contra la impunidad de las muertes, y hasta se radicalizan con el vuelco de importantes delegaciones hacia Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte o “Dina asesina”, elecciones inmediatas y asamblea constituyente.

El gobierno persiste en su política, pero lo que ha hecho hasta ahora es solo para subir en la espiral del conflicto. Por ejemplo, a pesar de los tanques de guerra que envió para desbloquear las carreteras, unas setenta de estas siguen bloqueadas; y la infamia de ver terroristas en cada provinciano que protesta, de perseguir manifestantes

en albergues improvisados en campus universitarios, e incursionar en San Marcos para ensañarse con ancianos, mujeres y estudiantes allí alojados apelando a pretextos burdamente montados, no hizo más que promover la participación de la juventud estudiantil y sectores obreros y populares en todo el país, incluida la Capital.

Gobierno y Congreso burlan el clamor popular

Desde hace dos semanas la lucha en Lima se convirtió en cotidiana y crece la bronca por las provocaciones del gobierno que cierra los accesos mil metros antes de las sedes del gobierno y el Congreso donde la gente quiere expresar su protesta; nunca se había impedido el ingreso a la Plaza San Martín como se ha hecho ahora. El sábado 28 de enero la lucha popular alcanzó un nuevo máximo en participación, y la respuesta represiva del gobierno fue más salvaje ocasionando un muerto y muchos heridos de gravedad.

En días previos dos movilizaciones multitudinarias iniciadas en los conos más populosos de Lima ya habían encendido la alerta en el gobierno y el Congreso quienes colocaron sobre la mesa un proyecto de adelanto de elecciones para este año 2023. Desde el viernes 27 el Congreso rechazó esa propuesta, y lo mismo ha hecho durante la última semana, de modo que hasta ahora no hay ningún adelanto.

Por su lado, Dina Boluarte se mantiene indiferente ante múltiples muestras de

bandera socialista

Año XLIII - N° 138 | Febrero - 2023

Publicación mensual del Partido Socialista de los Trabajadores - PST.
Sección peruana de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional - LITci.

Dirección: Av. Nicolás de Piérola 672, Oficina 407, Lima

Director: Eduardo Pflucker

Redacción: Freddy Salazar | Antonio Encinas | Víctor Montes | Clarita López | Laura Sánchez | Manuel A. Fernandes
| Jack Reyes | Alex Díaz | Mauricio Meca

Corresponsales: Arequipa: Evaristo Checa | Iquitos: Renato Achata | Pucallpa: Suliana Talaverano

Diseño y Diagramación: Alex Díaz | Depósito Legal: 2004-8512

rechazo y pedidos de renuncia de parte de gobernadores regionales, ex presidentes, partidos políticos, numerosos alcaldes, entidades públicas, religiosas, etc., al tiempo que arrecia con la represión, militarizando varios puntos del territorio nacional. Patea la pelota al Congreso para que apruebe el adelanto de elecciones.

Riesgo de reducción de las demandas populares

En ese contexto, existe el peligro de que las demandas de la población no sean escuchadas o sean distorsionadas. Incluso si el Congreso finalmente adelantara las elecciones para este año, eso no resolvería el reclamo popular de renuncia de Dina Boluarte por su responsabilidad política en la matanza además de la responsabilidad penal.

Por otro lado, si Dina renuncia, no sería admisible que sus aliados en el Congreso tomen la posta en el gobierno de transición, aunque sea por pocos meses, pues son igualmente responsables de la política que llevó a 60 muertos, y no darían ninguna garantía de no obstaculizar la investigación y sanción de todos los responsables de la masacre. Por eso la demanda popular de cambiar la mesa directiva del Congreso.

La demanda de una convocatoria a Asamblea Constituyente también viene siendo bloqueada por la mayoría del Congreso.

Para enfrentar estas amenazas no basta con la movilización de los pueblos de las regiones y las delegaciones de provincias en Lima, es indispensable la participación masiva del movimiento obrero, juvenil y popular a nivel nacional. Por eso desde Bandera Socialista hemos venido proponiendo la organización de un Paro Nacional como parte de un plan de lucha por el triunfo de la plataforma. La convocatoria de la CGTP a una huelga nacional indefinida desde el 9 de febrero apunta en esa dirección, pero no basta si no está unido a un trabajo efectivo base por base aprobar y organizar la participación de la clase trabajadora en esa medida de lucha.

Se necesita un verdadero Paro Nacional obrero y popular

La caída de Castillo generó una respuesta **legítima** de los sectores campesinos y populares más pobres y olvidados del Perú, principalmente porque vieron en pantalla gigante cómo la derecha y el Congreso corrupto, que atacaron al gobierno desde el primer día, se quedaban en Palacio y con ello enterraron todas las expectativas de cambio que depositaban en Castillo.

Más todavía si esos ataques, orquestados por la derecha y la gran prensa, destilaban odio de clase ante el gobierno que el pueblo pobre consideraba suyo, aun cuando Castillo no cumpliera con ninguna de sus promesas y acabara envuelto en escándalos de corrupción.

La respuesta del nuevo gobierno Boluarte de la mano de este Congreso impresentable, fue la de declarar **estado de emergencia** y meter bala para aplastar la lucha, la que hoy se ha convertido en una verdadera **rebelión popular**.

Y no es para menos. Los sectores en lucha hoy cargan **58 muertos** que describe la masacre con la que responde Boluarte, que se aferra al sillón presidencial para satisfacción de la derecha que exige mano dura para enfrentar la rebelión, aunque sea quemando todas sus fichas antes de ceder a las demandas populares.

El despliegue hacia la capital de inmensos contingentes populares y campesinos utilizando sus pequeños recursos, la lucha incansable que se repite todos los días en el interior del país y que en Lima produce enfrentamientos, y como la solidaridad con la que se sostienen, **son heroicas**, porque enfrentan a un gobierno que les ha declarado la guerra; por ello no hay marcha atrás, aun sabiendo que cada día podría dejar más dolor y sufrimiento y la posibilidad de perder **más vidas**.

La juventud universitaria y sectores populares de los conos de Lima empiezan a entrar en escena. Ven en el gobierno de Boluarte un ataque a las libertades democráticas, como fue la intervención abusiva en San Marcos, y contra el discurso del gobierno que etiqueta a los que luchan como **terroristas** y **violentistas** para justificar las muertes.

Y aunque los **trabajadores** participan de las movilizaciones, los más organizados en sindicatos y federaciones aún se encuentran lejos de jugar un rol protagónico. La razón principal se debe al **rol** desorganizador y cómplice que juegan las izquierdas y las burocracias sindicales, quienes apoyan, pero no se deciden colocarse a la cabeza de la pelea.

Primero jugaron el rol de furgón del gobierno de Castillo, mimetizando a la clase obrera con el gobierno, perdiendo la oportunidad de organizar la movilización de los trabajadores para arrancar nuestras reivindicaciones; como resultado, la derecha



Escribete Manuel Fernández
Dirigente obrero del PST

ocupó las calles y acabó empoderándose para luego darle el zarpazo final al gobierno de Castillo.

Y ante el ascenso del gobierno Boluarte se **posicionaron** en el rol de defender la “institucionalidad y el estado de derecho”, y le dieron legitimidad.

En este maco Boluarte responde a sangre y fuego la lucha popular, con una clase obrera aun fuera de escena por la confusión y desconfianza que le imprimen sus actuales direcciones, como la dirigencia de la CGTP y los llamados partidos de izquierda, que hoy se **aferran** a sus curules parlamentarios.

Solo la presión de la descarnada lucha popular y luego de la masacre con la que respondió este gobierno, la dirigencia de la CGTP convocó un **Paro Nacional**. El paro no pasó de ser una jornada nacional de protesta. Después convocó dos movilizaciones, sin duda importantes y necesarias. Pero todo esto lo hace desde un llamado de **solidaridad**, cuando lo que se necesita es que la clase obrera se coloque a la **cabeza** de la lucha popular.

9 de febrero otro Paro Nacional

Ahora la CGTP anuncia la convocatoria a un nuevo Paro Nacional Cívico Popular para el 9 de febrero.

Ante esto debemos decir que, aunque importante y justo, está en manos de la dirigencia de la CGTP su realización **efectiva**.

Lo que realmente necesitamos es que la clase obrera se ponga al frente de la pelea con un verdadero Paro Nacional **combativo** que paralice las minas y la industria afectando las ganancias empresariales, y que paralice al Estado y la actividad de todos aquellos que propugnan la masacre del pueblo.

Solo con esta acción decidida, como lo hicieron nuestros padres y abuelos en el Paro Nacional del **19 de Julio de 1977** que echó a la dictadura militar de entonces, podremos derrotar al gobierno criminal de Boluarte y del Congreso apoyados en las FF.AA. y FF.PP.

Debemos **emplazar** a los dirigentes de las centrales y federaciones que cumplan con garantizar esta tarea. Y debe ser tomada por los **dirigentes de base** más conscientes y combativos. Es hora de poner en pie nuestras asambleas y discutir en cada centro de trabajo la necesidad de hacer un contundente Paro Nacional que garantice el triunfo de la actual lucha.

Dependerá de nuestra acción y convicción darle una salida a esta crisis por esta vía. Una salida que permita que la clase trabajadora y el pueblo en lucha decidan los destinos de nuestro país.



El estallido de la democracia de los explotadores



Por Víctor Montes

El abrupto fin del gobierno de Pedro Castillo, la asunción de Dina Boluarte como presidenta, y el estallido de luchas por su caída, constituyen la expresión más reciente y cruda de la crisis del régimen político establecido por el imperialismo, la burguesía y el reformismo, una vez caída la dictadura fujimorista: el llamado “retorno a la democracia”. En concreto, constituye su estallido.

¿Cómo llegamos a esta situación y qué tareas nos plantea la lucha de clases para superar este momento?

Nacimiento y crisis de la democracia pactada

Como apuntamos en un artículo publicado en diciembre de 2021, “(tras la caída de la dictadura fujimorista) *La patronal y el imperialismo, que habían convivido y lucrado durante una década gracias a la dictadura, buscaron la forma de salvaguardar sus propios intereses. Por eso, los partidos burgueses que impulsaron la transición a la democracia, en lugar de ir hasta el final y echar abajo la Constitución de 1993, pactaron una “transición ordenada”, ofreciendo en el “retorno a la democracia” una promesa de “institucionalidad” limpia y capaz de atender los problemas en los que vivía el país.*” (Víctor Montes, El fracaso de la democracia pactada, **Bandera Socialista**, diciembre de 2021)

A dicho acuerdo se sumó toda la izquierda reformista (Patria Roja, Partido Comunista, el entonces Partido Socialista, hoy dentro de Nuevo Perú, etc.), que renunció en aquel momento a mantener la movilización obrera y popular hasta tumbar la constitución fujimorista, marco legal del Estado.

Justamente por eso, aquel régimen “democrático”, heredero de la dictadura, mantuvo importantes



Foto: Internet

elementos autoritarios, pero sobre todo, perpetuó la completa sujeción del país al modelo económico neoliberal, y su ubicación como exportador de materias primas (metales) en la división internacional del trabajo.

Y con esto, renunció a ser una democracia, como la entiende el pueblo pobre y trabajador, donde las mayorías populares puedan determinar el rumbo del país y las medidas necesarias para atender sus necesidades y demandas. Y se sometió al poder de las transnacionales y grandes grupos empresariales nativos, ratificando el despojo de los territorios de las comunidades campesinas e indígenas a manos de las grandes mineras, la reconcentración de tierras y el acceso al agua en manos de la agroindustria. Y en las fábricas, minas y comercios del país, garantizó el poder despótico de los patrones sobre los trabajadores, manteniendo la legislación antilaboral de la dictadura. Sin importar si los gobiernos se decían “de derecha”, “de centro” o “de izquierda”.

Como garante de dicho pacto nació el llamado “Acuerdo Nacional”. Institución que, junto a la crisis progresiva del régimen, ha

ido desapareciendo de la escena política.

Polarización y estallido

La elección de Castillo llevó la crisis del régimen democrático, pactado por los partidos de la burguesía y el reformismo contra el pueblo pobre y trabajador, a un nuevo nivel.

Hijo indirecto de la derrota del gobierno de Merino y la absoluta crisis de los partidos del régimen (incluidos los que reivindican la dictadura fujimorista, como Fuerza Popular y Renovación Popular), Castillo pasó a la segunda vuelta de la mano del voto del interior y, sobre todo, de los sectores más empobrecidos del campo (15% de la votación en primera vuelta).

Luego, en la contienda contra Keiko Fujimori, sumó a su caudal electoral importantes sectores de la clase obrera urbana y una parte de las clases medias “progresistas”, logrando una sólida votación en toda la sierra del país, llegando a votaciones superiores al 80% en la sierra sur (Puno, Cusco, Apurímac y Huancaavelica), en un ambiente de polarización en el que los sectores más rancios de la derecha política revivieron el viejo “terruqueo”, y elevaron la candidatura de

Fujimori al grado de “cruza-da anticomunista”.

En este marco, y como decíamos en diciembre del 21, la elección, además, volvió a poner en evidencia *“la profunda fractura entre los intereses del interior, más aún de las zonas rurales, con el epicentro de la “bonanza” neoliberal: Lima.”*, plaza en la que, junto a la costa central y norte, ganó Fujimori.

Vista así, la elección no podía cerrar, ni siquiera encaminar, la crisis que se había hecho crónica desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien no pudo terminar su mandato envuelto en conflictos con el legislativo y acusaciones de corrupción en el marco del escándalo Lava Jato.

Los meses no hicieron más que reproducir, una y otra vez, la crisis del gobierno y del régimen político, con un Castillo que renunció a aplicar el programa que había levantado, un Congreso con mayoría de derecha que los hostigaba permanentemente, junto a los medios de comunicación, con el objetivo manifiesto de vacarlo, y un conjunto de problemáticas sociales irresueltas demandando salidas a un gobierno que se decía “del pueblo” pero que no tomó una sola medida efectiva para

hacerles frente.

El 7 de diciembre Castillo, en circunstancias que aún resultan incomprensibles para muchos, intentó abruptamente resolver el conflicto con el legislativo cerrándolo y tomando control del aparato judicial. El intento de golpe, fallido, pues las Fuerzas Armadas no siguieron las órdenes del entonces presidente, creó el escenario perfecto para que la reacción parlamentaria tomase control del gobierno, acordando con Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, conformar un gobierno de “unidad nacional” y quedarse hasta 2026.

La respuesta de los pueblos del interior, que al cabo de pocos días se levantaron contra el nuevo gobierno, echó por tierra la posibilidad de que dicho acuerdo prospere, y abrió una profunda fisura en el costado de una democracia que, de inmediato, se dispuso a disparar y matar para sobrevivir.

Con esto, el propio régimen se invalidó ante las masas movilizadas, que además de exigir la caída del gobierno, y el cierre del Congreso, es decir, “que se vayan todos”, también exige desechar esta democracia para reemplazarla por otra que, desde su perspectiva, responda a los intereses genuinos de los sectores más pobres e históricamente marginados del país. Y en ese sentido, entienden, levantan la consigna de Asamblea Constituyente.

No es posible “defender” esta democracia

La brutal represión desatada por la democracia pactada es la prueba final de que el régimen está muerto.

Es decir, la democracia existe, pero no tiene salida ni puede dar solución a las demandas planteadas. Por eso, o avanza en su cauce autoritario para controlar el país, derrotando a sangre

¿Poner “la otra mejilla” o defendernos?

Con absoluto cinismo, el gobierno de Boluarte y el Congreso, que ha asesinado a 58 personas, herido más de 1000, y detenido a cerca de 500 antes de cumplir los dos meses de gobierno, continúa acusando a las miles de personas que se movilizan en su contra de “violentistas”.

Los medios de comunicación, en línea con esta política, redoblan su propia cruzada contra los “vándalos” y “terrucos” que, afirman, “generan violencia”.

¿Es que realmente el país está “tomado” por grupos “subversivos” que desatan el “caos” y la “violencia” ante una policía que “solo cumple con su deber”?

Es el gobierno el que desata la violencia

Los números son contundentes: 58 personas asesinadas, con disparos de perdigón, balas o impactos de bombas lacrimógenas en la cabeza o el tórax, es el saldo de la acción policial y de las Fuerzas Armadas.

Masacres como las de Ayacucho y Juliaca, o la incursión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con la violenta detención de los compañeros y compañeras que se encontraban dentro de la ciudad universitaria, han dejado en claro la vocación represiva del gobierno, y su uso deliberado y abusivo de la fuerza, causando muertos y heridos.

¿A quién “defiende” la policía y las FF.AA.?

El accionar de la policía y las FF.AA. está “justificado” para el empresariado y los partidos patronales, que claman “orden” y “mano dura”, porque sienten que al fin se han desecho de un gobierno (el de Pedro Castillo) que, aunque mantuvo incólume la política económica neoliberal, expresaba de manera distorsionada el anhelo de cambios profundos de las masas empobrecidas y explotadas del país. Por eso no lo sentían como propio.

Hoy la violencia policial y de las fuerzas armadas defiende a un gobierno que los patrones tienen directamente en sus manos. Por eso, aunque Boluarte intenta aparecer como conciliadora, y ahora presionada por la realidad plantea el adelanto de elecciones para el 2023, mantiene el Estado de Emergencia y continúa victimizando a la policía, mientras **terruquea** a los luchadores.

¿En quiénes se apoya el gobierno?

Esta postura del gobierno de Boluarte es apoyada por las grandes empresas (mineras, petroleras y agroexportadoras, principalmente), y por sectores de la llamada “clase media” en las ciudades, que han sido ganadas por el discurso reaccionario del gobierno y los medios, que identifican las protestas con las acciones terroristas que realizaron grupos como Sendero



Por Víctor Montes

Luminoso en las décadas de 1980 y 1990.

También son estos sectores los que, mayoritariamente, fueron convencidos de las “bondades” del modelo económico neoliberal, que durante el “boom” de los precios de las materias primas (2004-2013 aproximadamente) les permitió consumir más de lo que estaban acostumbrados, y hoy desprecian a los pueblos del interior, para quienes solo tienen adjetivos racistas y humillantes.

¿Tenemos derecho a defendernos!

En ese contexto, es comprensible que la población, indignada por el accionar de la policía y las FF.AA., así como por el terruqueo al que es sometida por los medios de comunicación y los sectores urbanos de “clase media”, haya terminado quemando locales públicos, como las comisarías, o se defiende con lo que tiene a mano (palos, piedras, warakas).

Es la violencia que desata el Estado por medio de las fuerzas armadas y policiales contra quienes marchan, y la indolencia del gobierno ante sus reclamos, lo que obliga a los sectores en lucha a defenderse.

Más aún, después de 58 personas asesinadas por la represión, lo mínimo que debe hacer cualquier organización que sale a luchar, es pensar de antemano en la forma en que se va a defender de la represión, y en cuanto pueda, cómo avan-



Foto: Archivo Bandera Socialista



Foto: Internet Tiempo argentino



Foto: EFE

zar sobre sus posiciones para lograr los objetivos de la lucha.

Por eso es clave que, desde las organizaciones obreras, campesinas y populares, reivindicemos el derecho a la autodefensa: porque nos defendemos de la acción violenta del gobierno de Boluarte y el Congreso, tal como hizo el pueblo chileno durante el estallido de 2019 (la llamada “primera línea”) o el pueblo del valle de Tambo en su lucha contra Tía María (los “espartambos”).

Esta es una necesidad

urgente de la lucha en curso, que lamentablemente enfrenta, además del discurso oficial, la política de las dirigencias de las centrales (como la CGTP) y partidos reformistas (Nuevo Perú, PC-Unidad o Patria Roja) que se dicen “de izquierda”, pero que asumiendo la lógica de la “protesta pacífica”, han renunciado a enfrentar la represión del gobierno. Incluso abandonaron la movilización a la primera bomba lacrimógena, como demostraron el pasado 19 de enero.



viene de la
página 4

y fuego la movilización, potenciando la presencia militar en la vida política del país, modificando su propia esencia, o cae a manos de la movilización del pueblo pobre, profundizando su debilidad.

Y es a esta última variante a la que es necesario apostar. Sin embargo,

de producirse, las cosas tampoco son mecánicas: puede suceder (como pasó en Ecuador el año 2000) que tras la caída del régimen, los sectores movilizadores devuelvan el poder a los mismos partidos (u otros nuevos) patronales que buscarán “volver a la democracia”, solo para

reproducir la misma crisis. Otra posibilidad, es que en el fragor de la lucha, los organismos vivos de la clase trabajadora y el pueblo movilizado tomen en sus manos la definición de un nuevo régimen abriendo la posibilidad de construir un verdadero poder obrero y popular en el país.

¿De qué depende una u otra variante? fundamentalmente del ingreso organizado y consciente de la clase obrera, que es la única clase social que puede enarbolar una verdadera alternativa, revolucionaria, política, económica y social para el país. Porque esta democracia, que es la

democracia de los patrones, no puede regenerarse, ni “hacerse humana”, y por tanto no puede defenderse. Es una democracia de explotadores y asesinos del pueblo trabajador. Una democracia pactada en el 2000 contra los trabajadores y el pueblo. Y ha llegado la hora de echarla abajo.



Nutrida presencia del Sindicato de trabajadoras Aje en la jornada de lucha por el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y por una nueva Constitución.

La clase obrera y su dirección en el momento actual

El problema de la movilización o desmovilización de los trabajadores tiene que ver con su dirección política, principalmente de la CGTP.

Un hecho que todos podemos constatar es que la **clase obrera organizada** se encuentra casi ausente de la lucha que hoy se libra en el Perú contra el gobierno de Dina Boluarte, pese a que en ella se juega su propio destino. Que algunos sectores participen en las convocatorias dosificadas la CGTP —que va a remolque de los acontecimientos con su política de acompañar el proceso y no de liderarlo—, o que vaya a hacerlo un poco más en los días que vienen, no cambia esta situación.

Y no estamos hablando de una cosa menor: el papel de la clase obrera es **decisivo** en estos momentos; su poca participación dilata esta lucha, ya larga y dura, mientras su inclusión a ella con toda su fuerza contribuiría a su pronta victoria.

La presencia de la clase obrera es decisiva no solo por su ubicación en el corazón de la economía que mueve los grandes negocios (minas, fábricas, agroexportadoras), de la que se nutren los dueños del país, sino también por su inmenso potencial, el que se expresa en sus numerosas organizaciones forjadas en grandes peleas: la lucha de miles de

textiles contra el régimen de exportaciones (2009-2014), la gran lucha contra la ley pulpín (2015), la huelga de la poderosa Federación Minera por su pliego único (2017), la infinidad de huelgas heroicas y largas por la solución de sus pliegos, como las acaecidas el último año.

Estas luchas muestran, además de que la clase obrera **existe**, su disposición de lucha, aunque hayan sido luchas económicas, o como se suele decir, “por lo suyo”. Sin embargo, que no se involucre en la lucha actual con todas sus fuerzas y no abrace su causa y sus banderas, se deben a una razón: su **dirección** política, la CGTP, conciliadora y reformista.

En la lucha cotidiana los trabajadores más avanzados pueden llegar a comprender sus limitaciones: por ejemplo, que la pelea por sus **pliegos** es muy difícil y que mejor es un pliego sectorial o único, que no solo enfrentan a un patrón sino a una clase y a un sistema, con leyes y fuerzas represivas incluidas; pueden llegar a comprender también la necesidad de su **unidad de clase** para luchar por conquistas generales y de su **alianza** con los sectores más explotados para lograr

derechos sociales y democráticos.

Pero, los trabajadores no avanzan en esta comprensión y no escalan al plano **político** porque sus direcciones los mantienen **enfocados** en sus pliegos y aislados a sus **espacios** sindicales. Este es el rol cotidiano que cumplen las direcciones, en especial desde la CGTP. Por esta misma política ellas ahora intentan mantenerlos distanciados de la gran rebelión que los sectores populares protagonizan estos días.

Reformas sí, revolución no

Esto tiene una explicación. Si en el actual momento la clase obrera se colocara al frente de la rebelión en curso, en algún momento plantearía su propia salida: tomar el poder y establecer un **gobierno de los trabajadores**. Esto es así porque no hay ni existe otra forma de realizar el programa de cambios que se demanda (nacionalizaciones de las grandes minas, por ejemplo) sin la clase trabajadora movilizada en lucha frontal contra la burguesía, lucha que en su dinámica solo puede concluir y llevarse hasta el fin estableciendo el poder de los trabajadores.

Y, por supuesto, dichas direcciones **no quieren** nada de esto. Ellas solo sueñan con “reformular” el sistema actual y hacerlo más “humano”. Pero como el sistema (capitalista) no acepta ni esto (como se ve en su fiera oposición a que se convoque a una Asamblea Constituyente), terminan capitulando, tal como hicieron durante la presidencia de Castillo donde teniendo el poder en sus manos no realizaron **ninguna** de sus promesas.

Por eso estas direcciones, en la misma línea que han seguido todos estos años cuando han mantenido a la clase obrera encerrada en sus luchas aisladas y por reclamos sectoriales, ahora no hacen **nada** para sumarla a la lucha actual, a fin de evitar que se vuelva un actor político revolucionario.

Los sectores en lucha

Ahora bien, los sectores que luchan estos días tienen otra dinámica y escapan al control de esas direcciones. Están conformados por campesinos pobres y pequeños comerciantes, y que conforman la otra cara del modelo neoliberal (polos de **riqueza** en actividades



Foto: Archivo Bandera Socialista

Obreros del sindicato Celima, presente en la jornada de lucha por la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.



Foto: Cortesía Sitramac

Delegación del sindicato de trabajadores de Comacsa, Sitramac, presente en las jornadas de lucha.



Foto: Facebook CGTP Perú

Es necesario trabajar por el surgimiento de una nueva dirección clasista y revolucionaria para la clase obrera que haga suya las postergadas demandas de cambio exigidas por nuestros hermanos del campo.

con lo que encendieron la rebelión que protagonizan hoy.

La burguesía no se cansa de señalar como responsables de la actual ola de luchas a esa misma “izquierda” reformista y conciliadora. Pero es falso. Esa izquierda está completamente desecha precisamente por su papelón durante el gobierno de Castillo, porque votó por la **vacancia**, y porque ahora mismo en el debate por el adelanto de elecciones muestra que se aferra a sus **curules**. Por encima de estas “direcciones” fallidas lo cierto es que la actual lucha ha salido de la base, y es ella la que la sostiene y da impulso presionando a sus direcciones.

Las bases que luchan aprendieron la lección del gobierno de Castillo: los cambios no se logran con el **voto** sino **luchando**, no se conquistan en el Congreso sino en la calle, no se logran conciliando con la burguesía sino peleando contra ella hasta derrotarla. Y lo hacen de la única forma que pueden hacerlo: con sus **organizaciones territoriales** y con sus propios métodos de lucha como son los bloqueos de carreteras, tomas locales y enfrentándose a la policía.

Este es un gran avance que muestra la lucha actual y que ha dejado atrás a las direcciones y a la clase trabajadora.

Esta particularidad es usada por la burguesía para **confundir** a los trabajadores y mantenerlos alejados de esta lucha. Por ejemplo, con una intensa propaganda etiquetan a esta rebelión como **violenta**, de vándalos y subversivos; y por oposición, ellos se pretenden defensores de la **paz y tranquilidad**. Esta patraña sería fácilmente desenmascarada si desde las direcciones se la denunciara de manera firme y se tomara partido sin condiciones por la lucha actual; pero su tibia postura es la que permite que esa campaña haga mella sobre la conciencia de amplios sectores de trabajadores.

Conclusión

Todo esto lleva a una conclusión: la actitud de los trabajadores ante el conflicto actual está atravesada por el comportamiento de su dirección mayoritaria, de tiempo atrás y en el actual momento.

Esto hace necesario poner en pie una **nueva dirección** clasista y revolucionaria, que haga suya las demandas de cambio del campo, la lucha por la Constituyente, la nacionalización de las minas y por la conquista de un gobierno de los trabajadores y los pobres que haga realidad estas aspiraciones.

Esta es la dirección a la que el **PST** invita a construir a los luchadores en el momento actual. Su necesidad es urgente.

oligopólicas y extractivas donde se genera empleo y se ubica la clase trabajadora, en un **mar** de pobreza repartido en todo el país). Estos sectores se apropiaron de la candidatura de **Pedro Castillo** y sus propuestas de nacionalizaciones y Constituyente, como **esperanza** para cambiar sus vidas, luego de la tragedia que significó la pandemia; mientras la clase obrera solo se sumó a ellos de la mano de sus direcciones agrupadas tras la candidatura *light* de Verónica Mendoza.

¿Y que obtuvieron? Enorme **frustración**. Desde esos sectores solo se vio un ataque permanente de la burguesía y sus agentes en el Congreso, y el mismo Castillo justificó su renuncia a los cambios que había ofrecido por esos ataques. Así, desde estos sectores populares se vio la vacancia como la consumación del golpe tantas veces anunciado por esa burguesía, y cuando se lanzaron a la calle en defensa de sus esperanzas de cambio, recibieron por toda respuesta balas y muerte,



La lucha por la Constituyente



Por Víctor Montes

La lucha que se ha abierto tras la caída de Castillo y la asunción al gobierno de Dina Boluarte, ha puesto en la agenda política del país, con más fuerza, la demanda de una Asamblea Constituyente, impulsada por la movilización campesina y popular que fundamentalmente desde el sur del país, sostiene la lucha contra el gobierno asesino de Boluarte y el Congreso.

Esta demanda expresa el anhelo por acabar con la Constitución de 1993, impuesta por la dictadura de Fujimori, y que sirve de “cerrojo” legal al sometimiento del país a la voracidad de las transnacionales mineras, petroleras y agroindustriales.

Haciendo un paralelo con la consigna que reflejó el estallido social chileno en 2019 (“no son 30 pesos, son 30 años”), la exigencia de una nueva Constitución busca, desde dichos sectores, acabar con esos 30 años de saqueo neoliberal, que se traduce en el despojo de las tierras y territorios de las comunidades campesinas e indígenas para expoliar los recursos naturales (sobre todo los mineros), la súper explotación de la clase trabajadora y la estela

de desigualdad y miseria que nos llevó a tener más de 240 mil muertos durante los momentos más álgidos de la pandemia de Covid 19.

Del otro lado, encuentra la absoluta oposición de la patronal y sus partidos políticos, quienes muestran no estar dispuestos a tocar un ápice de la Carta Magna dictada por Fujimori en 1993, y que desapareció de un plumazo el capítulo laboral que contenía la de 1979, abrió el camino a la venta de las tierras comunales en el campo, y le otorga absoluta primacía a la inversión privada.

Por eso la caída de esa Constitución es una demanda legítima, que la clase trabajadora debe levantar junto a sus hermanos y hermanas del campo, para potenciar la movilización y unir sus acciones contra el gobierno y el Congreso, esto es, contra el régimen de la democracia corrupta y patronal que defiende la permanencia de dicha Constitución.

¿Qué debe discutir y votar una Constituyente?

Sin embargo, hay que saber que la Asamblea

Constituyente por sí misma no va a resolver ninguno de los problemas del pueblo pobre y trabajador del país. Una Constituyente dominada, por ejemplo, por los mismos partidos del actual régimen político, solo sería garantía de la continuidad y profundización de la entrega del país. Incluso, como sucedió en Chile, bastaría que la Constituyente funcione bajo la lógica de una mayoría colegiada, es decir, que solo apruebe aquellas disposiciones que logren los $\frac{2}{3}$ del total de votos, para cerrar la puerta a las demandas más sentidas de la población.

¿Y cuáles son esas medidas? La nacionalización de las minas, pozos petroleros y gasíferos del país para que esos recursos se pongan al servicio de la salud y la educación del pueblo.

La devolución de los territorios despojados a las comunidades nativas y campesinas, actualmente en manos de las transnacionales mineras y la agroindustria.

Tomar medidas para remediar y proteger el ambiente, expoliado brutalmente por la minería, las empresas forestales, las petroleras y las pesqueras. Por ejemplo, para

echar a Repsol, responsable del derrame de petróleo en Ventanilla, y con sus activos remediar el ecosistema marino afectado. Otro tanto pasa en la amazonía.

Otorgar plenos derechos laborales a la clase trabajadora, acabar con la informalidad repartiendo el trabajo entre todos los que lo requiera, garantizando un salario y pensiones iguales a la canasta de consumo. A igual trabajo igual salario.

Jubilación universal financiada oportuna y de manera suficiente con impuestos a las grandes fortunas y empresas, etc.

Solo el poder obrero y popular pueden garantizar esas decisiones

Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la experiencia chilena, la Asamblea Constituyente, por sí misma, no es una salida a todos los problemas del país. Incluso, puede convertirse en una trampa para los que luchan.

Esto porque de un lado, como adelantamos, la patronal busca formas de crear cerrojos, que impidan que

dicha institución apruebe las demandas obreras y populares (como la votación colegiada de $\frac{2}{3}$).

Pero también porque, de concretarse, la patronal apostará a que miles de luchadores y luchadoras depositen su confianza en los votos, arrancándolos del único terreno en el que se pueden conquistar nuestras demandas: la lucha.

Porque es solo a condición de continuar luchando, y construir en ese camino los órganos del gobierno obrero, campesino y popular, podremos garantizar, bajo el poder de la clase trabajadora, que cualquier Constituyente tenga, por fuerza, que aplicar las demandas del pueblo pobre y trabajador.

En ese sentido, siendo correcto y necesario luchar por la Asamblea Constituyente, para unir en ese camino a la clase trabajadora y al pueblo pobre del campo y la ciudad, volvemos a plantear que solo con el poder en manos de nuestras organizaciones de lucha, los obreros, campesinos y estudiantes, el pueblo pobre podrá definir democráticamente los destinos del país.

CUSCO

Trenzando la esperanza y confianza en la lucha

La región de Cusco y el país no son lo mismo desde el 7 de diciembre del 2022. Cientos de vehículos con sus distintivos locales y propia organización, llegaron, desde entonces, a la ciudad de Cusco dispuestos a luchar.

Las provincias de Canchis, Quispicanchis, Anta, junto a los mercados, la Federación Universitaria y un grupo pequeño de maestros pusieron en marcha las movilizaciones y piquetes.

Tras las fiestas, una nueva y poderosa ola de manifestantes enfrentó la primera represión policial en la Avenida 28 de Julio. Ahí cayó asesinado Remo Candia Guevara, dirigente principal de la provincia de Anta. Hubo varios heridos de perdigones, bombas lacrimógenas y detenciones ilegales como arbitrarias.

En paralelo, el trabajo sucio de lúmpenes e infiltrados comenzó a hacerse sentir, cometiendo actos violentos en el mismo centro histórico, con la finalidad de desprestigiar la lucha y acusar a los manifestantes.

Los días posteriores las provincias de Canas, Paucartambo se suman a las protestas desafiando el estado de emergencia y el



Corresponsal de Cusco

Foto: La República

La represión se endureció luego del discurso de Boluarte.

Sin embargo, los grandes ausentes en esta y las otras jornadas son los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones; trabajadores del sector público y privado, además de los sectores populares cuyos dirigentes le dan la espalda a la lucha.

El 24 de enero se suman los miembros activos y egresados de las diferentes facultades y carreras de la UNSAAC. La marcha empieza con el arribo de la provincia de Calca y sus distritos. Fueron miles entre negociantes, estibadores, agricultores, maestros, trabajadores y estudiantes. El pueblo pobre del Cusco no se rinde. Por eso, más delegaciones siguen desplazándose hacia la capital, en una dinámica de flujo y reflujo.

Hay hilos que comienzan a trenzar la esperanza y confianza en la lucha, hay puentes que comenzaron a reverdecer, los caminos se vuelven anchas avenidas para un pueblo que decidió revelarse ante la opresión y la injusticia; el pueblo no fue derrotado aún.

toque de queda. Bordean el aeropuerto. Otros enfrentamientos se dan por los distritos de San Jerónimo y San Sebastián, el centro de las protestas sigue siendo la Av. 28 de Julio y sus calles paralelas. Son miles de manifestantes y se establecen las ollas comunes en la plaza Túpac Amaru. Barrios populares, familias, personas particulares, pequeños negocios, asociaciones de diferente índole se hacen presente con donativos.

Del 19 de enero hacia adelante

Las delegaciones de provincias van y vienen a la

ciudad. Se turnan para garantizar las movilizaciones y protestas en la ciudad de Cusco. Pero la masacre en la provincia de Juliaca, enerva a los manifestantes y anima más la lucha.

En este contexto, la ultraderecha ("polos blancos") pretende disputar la calle con sus denominadas "marchas por la paz y el trabajo", compuestas principalmente por apristas, fujimoristas, familiares de militares y policías, y policías vestidos de civil.

El rechazo de los manifestantes y el pueblo no se hizo esperar. El 16 de enero las delegaciones de las distintas provincias

emprenden el viaje a Lima.

El llamado "Paro nacional" del 19 de enero fue contundente en la región de Cusco. Provincias, sindicatos de construcción civil, mercados, universitarios, maestros y muchas personas del sector barrial sostuvieron los piquetes en distintas partes de la ciudad durante casi todo el día.

Por la tarde la represión fue brutal en inmediaciones del aeropuerto, en el distrito de San Sebastián y en la Av. 28 de Julio. La represión usó de manera criminal su arsenal. Desde una tanqueta lanzaban bombas lacrimógenas y perdigones dejando varios heridos.

¡Alto la represión de Boluarte y el Congreso corrupto!

Desde que asumió la presidencia Dina Boluarte, esta ha desencadenado una violenta represión contra los manifestantes del campo y la ciudad.

Represión que ha costado la vida de 58 personas, más de mil heridos y un centenar de detenidos arbitrariamente. Incluso, en la región Cusco del sur del país, en un juicio *exprés*, condenaron con cárcel efectiva a

tres jóvenes que ejercían su derecho a protestar.

Hoy la represión se concentra en la capital. Primero la intervención policial en San Marcos, que contó con la autorización de la rectora Jerí Ramón, con más de 560 efectivos, para detener a 196 provincianos alojados. También intervinieron la residencia de los estudiantes, que nada tenían que ver con los provincianos alojados. Rompieron puertas, destrozaron enseres de las

mujeres estudiantes quienes fueron golpeadas, vejadas y enmarrocadas como si fueran delincuentes o "terroristas".

El sábado 28 de enero asesinaron a Víctor Santisteban Yacsavilca. Le dispararon una bomba lacrimógena en la cabeza, en circunstancias en que se retiraba y no representaba amenaza alguna para algún policía como muestran los videos. "Le volaron los sesos", dijo con voz quebrada el doctor que lo socorrió. "Tiraron a matar",



Foto: Agencia EFE

mencionó otro brigadista.

Lo último, la violenta embosca a la marcha pacífica de los conos de Lima, disparando lacrimógenas a diestra y siniestra, golpeando y deteniendo a varios manifestantes.

Todos los días somos testigos de la violencia con la que actúan los policías, y lo hacen no para disuadir sino

para **dañar y malograr** al manifestante.

Estos asesinatos no deben quedar impunes. Exigimos **prisión inmediata** para los altos mandos militares y policiales responsables de estos crímenes. También **indemnización** del Estado a los deudos de los caídos y a los heridos.



En ese sentido, es equivocada y reaccionaria la posición de un amplio arco de intelectuales y organizaciones pacifistas, que se oponen a la “guerra”, así, en general.

Esta posición, aparentemente “neutra”, en realidad favorece a los invasores rusos, el lado beligerante más fuerte. Especialmente cuando, incluso en los casos en que retóricamente se admite que la agresión rusa debe ser condenada y se reconoce el derecho a la soberanía ucraniana, ese sector se opone a cualquier envío de armas para el mal pertrechado bando ucraniano. Es una incoherencia: ¿cómo, en medio de una invasión, los ucranianos podrán defender su soberanía sin las armas necesarias?

No es necesario ser un experto en la ciencia militar para entender que esta posición, en el contexto de un choque bélico, solo puede contribuir a la derrota del país invadido y más débil.

El pacifismo, asumiendo o no una retórica favorable a Ucrania, cuando rechaza el

armamento que Ucrania necesita para repeler la invasión y, en lugar de eso, confía en una distante y estéril solución diplomática, hace el juego a los intereses de Putin, que, mientras tanto, ocupa y bombardea sin cesar las ciudades ucranianas.

Es importante notar que tanto aquellos que, desde la izquierda, justifican la guerra de Putin o asumen una postura pacifista, aparentemente equidistante, en la práctica coinciden con los más recalcitrantes exponentes de la ultraderecha mundial, como Steve Bannon o Donald Trump. Este último manifestó su oposición ante el anuncio del envío de tanques: “*Primero vienen los tanques, luego las armas nucleares*”[1]. Debemos entender que la política de “nada de armas para Ucrania”, en los hechos, unifica a los pacifistas con los putinistas y con un amplio abanico de la ultraderecha internacional.

Por nuestra parte, desde el comienzo de la invasión rusa nos posicionamos

inequívocamente por la derrota de Putin y la victoria militar de Ucrania, sin por ello depositar un ápice de confianza en el gobierno de Zelenski ni en los imperialismos reunidos en la OTAN.

Consecuentemente, exigimos a todos los gobiernos el envío de armas pesadas, defensivas y ofensivas, tanques, aviones de combate y tecnología militar de punta, sin condiciones de ninguna índole, para que sean operados por los propios ucranianos y ucranianas, alistados en el Ejército regular o en las más variadas formas de resistencia obrera y popular.

El pueblo ucraniano es el verdadero protagonista de esta guerra. Con demasiado poco, y a pesar de un gobierno corrupto y conciliador, está consiguiendo defender su soberanía ante una fuerza militar muy superior. Imaginemos lo que sería posible si ese pueblo estuviera bien armado. La salida pasa por profundizar ese protagonismo, alentando la organización y movilización obrera y popular

dentro de Ucrania.

La salida no pasa por el pacifismo ni por pedidos de intervención imperialista. A partir del rechazo de los intereses de la OTAN, que debe ser disuelta, exigimos a esos gobiernos el envío de armas pesadas y todo el material bélico necesario, sin condiciones, para que Ucrania gane la guerra.

La política de la OTAN

Esto último es lo opuesto a la política implementada por EEUU y la Unión Europea, reunidos en la OTAN.

Desde que Ucrania fue invadida por Moscú, los imperialismos occidentales se dedicaron a declaraciones retóricas de apoyo a Kiev. La presión de la feroz resistencia ucraniana y de sus propios pueblos hizo que enviaran dinero, armas y equipamiento militar, pero con cuantagotas, muchas veces material bélico en mal estado y en cantidades no determinantes.

El envío lento y limitado de armas corresponde a la

política de presionar a Putin, pero sin acorralarlo ni mucho menos estrangularlo, buscando una eventual negociación en la que no está garantizado el respeto a la integridad territorial ucraniana.

Esta política explica las últimas decisiones de los imperialistas. El alardeado envío de tanques a Ucrania es, como los demás suministros bélicos, lento e insuficiente.

Las fuerzas ucranianas, que combaten en inferioridad de condiciones ante el segundo ejército más poderoso del planeta, cuentan con vetustos tanques del período soviético, en su mayoría T-72.

La flota de carros de combate, prometida por países miembros de la OTAN, aunque necesaria, no es suficiente para imponer un nuevo curso a la guerra. Para vencer la guerra, Ucrania necesita mucho más.

Los compromisos de los imperialistas rondan los 60 tanques, cuando Kiev solicita no menos de 300 unidades.

En una contraofensiva, según analistas de defensa,



Liga Internacional de los Trabajadores
Cuarta Internacional
www.litci.org



escanea aquí

Argentina
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Bélgica
Ligué Communiste des Travailleurs - LCT
(simpatizante)

Bolivia
Grupo Lucha Socialista
(simpatizante)

Brasil
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Chile
Movimiento Internacional de los trabajadores - MIT

Colombia
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

Costa Rica
Partido de los Trabajadores - PT

Ecuador
Articulación Revolucionaria de Trabajadores - ART
(simpatizante)

El Salvador
Plataforma de la Clase Trabajadora - PCT
El Salvador

Estado Español
Corriente Roja

Estados Unidos
Workers Voice - Voz de los Trabajadores
(simpatizante)

Honduras
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

Inglterra
International Socialist League - ISL

Italia
Partito di Alternativa Comunista - PdAC

México
Corriente Socialista de los Trabajadores - CST
(simpatizante)

Panamá
Liga de Trabajadores hacia el Socialismo - LTS
(simpatizante)

Paraguay
Partido de los Trabajadores - PT

Portugal
Em Luta - EL

Rusia
Partido Obrero Internacionalista - POI
(simpatizante)

Senegal
Liga Popular Senegalés - LPS
(simpatizante)

Turquía
Kirmizi Gazete - KG
(simpatizante)

Uruguay
Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST
(simpatizante)

Venezuela
Unidad Socialista de los Trabajadores - UST
(simpatizante)



los tanques occidentales, aunque mucho más modernos que sus pares ucranianos y rusos, solo podrían inclinar la balanza en operaciones de gran envergadura. Además, en términos operativos, cualquier ofensiva mecanizada depende de la combinación efectiva de otras armas, como la artillería pesada y, sobre todo, de una cobertura aérea contundente, algo que Ucrania no tiene condiciones de garantizar. No sirve para mucho enviar tanques, pero no aviones de combate.

El volumen, en la actual situación, es decisivo. Por otra parte, hasta poder recondicionar los tanques —muchos de ellos, como los del Estado español, se encuentran en desuso hace una década—, afinar la logística y completar el entrenamiento necesario, pueden pasar meses o incluso un año para la efectiva entrada en combate de los Leopard 2, Abrams o Challenger.

El propio “envío rápido” de los primeros 14 Leopard 2 alemanes tardaría unos dos o tres meses.

El tiempo es otro factor clave, puesto que tanto Ucrania como Rusia preparan sus ofensivas de primavera-verano. Ambas fuerzas pretenden romper el “punto muerto” actual, y el que golpee primero, tendrá la ventaja de trastocar los planes del enemigo.

Así, a casi un año del inicio de la invasión, la principal tarea continúa siendo derrotar a las fuerzas de ocupación rusas. No caben posiciones equidistantes. Es crucial expulsar a las tropas de Putin del territorio ucraniano, recuperando todos los territorios ocupados desde febrero de 2022, además de Crimea, anexada en 2014.

Pero, como explicamos, la política del imperialismo y de la oligarquía ucraniana, traducida en el terreno militar, no pretende una victoria contundente del pueblo ucraniano sobre Putin.

Solo desde el apoyo a la resistencia ucraniana se puede desenmascarar a la OTAN y a Zelenski

El pueblo ucraniano sí lucha por la victoria. Pero, para ello, no se debe confiar en Zelenski, pieza principal de un gobierno al servicio de los oligarcas, que aprovecha la situación de guerra para atacar las duras condiciones de existencia de la clase trabajadora, socavando así la resistencia. Además, muchos políticos y oligarcas ucranianos se están enriqueciendo por medio de groseros actos de corrupción en el suministro a las tropas y otros negocios ligados a la guerra.

Por su carácter de clase,

el gobierno de Zelenski es profundamente proimperialista y, tarde o temprano, traicionará la lucha de su propio pueblo.

Ninguna confianza, también, en el imperialismo estadounidense y europeo (OTAN), que no están dispuestos a tolerar una victoria genuina de los explotados de Ucrania contra Putin. Los imperialismos preparan una salida negociada, donde la opción de dividir el país no está descartada. Por eso, no envían la calidad y la cantidad de armas necesarias. Por eso, mantienen negocios con Putin. Si bien existe una política de la UE para disminuir la dependencia energética de Rusia, lo cierto es que, en 2022, Moscú aumentó 7% sus exportaciones de crudo y 28% los ingresos por la venta de petróleo y gas[2]. En plena guerra, países como el Estado español aumentaron 141% sus compras a Rusia[3]. No quieren la derrota final de Putin. Por eso, imponen sanciones aisladas y blandas, que no atacan el corazón de la economía y la máquina de guerra de la oligarquía rusa.

¡Armas para la resistencia ucraniana!

Es necesario exigir el armamento y la tecnología militar necesaria para derrotar

a Putin. Además del sistema de lanzamisiles múltiple HIMARS, los ucranianos piden misiles MGM-140 ATACMS, con alcance de 300 kilómetros. Los ucranianos piden, también, aviones de combate F-15, F-16 y A-10 Thunderbolt II (específico para apoyo aéreo de la infantería); sin esto, es imposible controlar el espacio aéreo.

Ucrania demuestra que la victoria es posible. La contraofensiva ucraniana del segundo semestre del año pasado golpeó duramente a los ocupantes. Además de la liberación de Kherson, ocurrida el 11 de noviembre, las tropas ucranianas recuperaron 54% del territorio que Rusia había tomado desde febrero de 2022[4]. La reconquista de Kherson, la única capital regional tomada por los rusos tuvo un impacto político y militar estruendoso.

Los ucranianos están demostrando que la máquina de guerra rusa puede ser derrotada y, con ello, debilitar a un importante colaborador de la contrarrevolución en el mundo.

Pero, para ganar la guerra, se necesita de mucho más apoyo. Es necesario intensificar la campaña de “Armas para Ucrania, por la derrota militar de Putin”, que debe ser asumida por todos los sindicatos y organizaciones obreras. La clase trabajadora mundial debe abrazar la causa ucraniana. La derrota de Putin será una victoria para la clase trabajadora internacional. Esta es la importancia, por ejemplo, de los dos convoyes internacionales realizados por la Red Sindical Internacional, de los que participó la CSP-Conlutas de Brasil, para llevar solidaridad activa, política y material, a sectores obreros de la resistencia local.

La LIT-CI seguirá en la primera línea de apoyo al pueblo

ucraniano. También continuaremos apoyando y solidariándonos con los perseguidos en Rusia, que están presos por oponerse a la guerra de Putin.

Insistimos: solo desde el apoyo a la resistencia ucraniana se puede combatir y desenmascarar a la OTAN, EE.UU., la UE y al propio gobierno oligárquico de Zelenski, incapaz de encarar la lucha contra el agresor ruso hasta las últimas consecuencias.

¡Trabajadores del mundo, uníos en apoyo a la resistencia ucraniana!

¡Por la derrota de las tropas de Rusia!

¡Armas para el pueblo ucraniano!

¡Viva la resistencia ucraniana!

¡Ninguna confianza en EE.UU., UE, OTAN!

¡Por la disolución de la OTAN!

NOTAS

- [1] <https://www.europapress.es/internacional/noticia-trump-carga-contras-entio-blindados-ucrania-primero-vienen-tanques-luego-armas-nucleares-20230126212519.html>
- [2] <https://elperiodicodelaenergia.com/rusia-aumento-7-exportaciones-crudo-2022-ingresos-petroleo-gas/>
- [3] <https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/09/08/6319ad3621efa08a388b45d6.html>
- [4] Según el Reino Unido, en diciembre Rusia controlaba 18% del territorio ucraniano reconocido por la comunidad internacional: <https://twitter.com/DefenceHQ/status/160229039023728640>





UCRANIA:

El envío de tanques y armas para Ucrania es insuficiente

A menos de un mes de que la invasión rusa de Ucrania cumpla su primer aniversario, y luego de meses de indecisión, los gobiernos de Alemania y EEUU anunciaron que enviarán un puñado de carros de combate a las fuerzas ucranianas.



Por Daniel Sugasti

Berlín se comprometió a enviar “rápidamente” unos 14 tanques Leopard 2A6. Este blindado, fabricado por la empresa alemana Krauss-Maffei-Wegmann, entró en servicio en 1979, pero debido a su permanente actualización, es considerado uno de los más modernos y capaces del mundo, en cuanto a blindaje, potencia, alcance de tiro y movilidad.

Washington, por su parte, enviará 31 tanques M1 Abrams a Ucrania y entrenará en un tercer país a soldados ucranianos en su uso y mantenimiento. El envío, sin embargo, tardará “varios meses”. Una dificultad adicional reside en que se trata de armas muy sofisticadas, que demandan una logística y un mantenimiento difícil de sostener. Por ejemplo, a diferencia de los Leopard 2, movidos a diésel, los Abrams requieren combustible de aviación, mucho más caro.

El Reino Unido aportará 14 tanques Challenger 2. Otros países como España, Polonia, Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Portugal se mostraron dispuestos a enviar tanques Leopard 2 a Ucrania, luego de la autorización del gobierno alemán. Pero la mayoría de esos países no ha especificado cantidades ni plazos de entrega. Francia, por su parte, todavía estudia el envío de tanques Leclerc.

La decisión occidental de suministrar tanques para reforzar la defensa ucraniana, previsiblemente, fue duramente contestada por Rusia, no solo en términos diplomáticos y propagandísticos, sino lanzando por lo menos 55 misiles y 24 drones iraníes sobre infraestructuras básicas de Odesa, Zaporíyia y Kiev. Al menos 11 personas murieron.

Las coincidencias entre putinismo y pacifismo

Los defensores de Putin, entre ellos muchos intelectuales y partidos estalinistas y/o castrochavistas, no pierden la oportunidad para decir que el envío de tanques –y cualquier ayuda militar– es la prueba de que el verdadero embate sería entre los imperialismos reunidos en la OTAN y un pretendido Putin “antiimperialista”.

Esta tesis, como explicamos en otras ocasiones, carece de fundamento y no se sostiene, pero es repetida hasta el hartazgo por ese sector para justificar la invasión, y con eso las atrocidades cometidas por los ocupantes rusos, de un país mucho más pequeño y débil.

Estamos delante de una brutal agresión con afanes de conquista y

destrucción de una nación históricamente oprimida por sucesivos gobiernos rusos, desde el zarismo, el estalinismo y el régimen dictatorial de Putin, exceptuando únicamente los primeros años de la Revolución Rusa. No olvidemos que Putin sostiene que Ucrania no debería existir.

Por consiguiente, la lucha del pueblo ucraniano, de la que participan de muchas formas la clase obrera y amplios contingentes organizados de la población civil, independientemente del carácter burgués, proimperialista y corrupto del gobierno de Zelenski, supone una causa legítima, necesaria, una “guerra justa” que urge la solidaridad internacional y todo el apoyo material posible. Se trata, por parte de Ucrania, de una guerra de liberación nacional. Esta es la verdadera naturaleza de la guerra.

Continúa en la página 10



Partido Socialista de los Trabajadores – PST
Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

